



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EDICIÓN MENSUAL / AÑO 3 / N° 31 / OCTUBRE 2011

ÓRGANO OFICIAL

En ceremonia especial el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesa presentó la Sistematización de la Jurisprudencia del TC que recopila las 662 mejores sentencias que ha emitido el máximo órgano de justicia constitucional desde que entró en funcionamiento. Se trata de una segunda versión actualizada a julio del presente año 2011.

El evento que se realizó en los salones de un conocido hotel contó con la asistencia de los magistrados del Tribunal, doctores Gerardo Eto Cruz y Oscar Urviola Hani, el Defensor del Pueblo, doctor Eduardo Vega Luna; Rebecca Arias, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público así como distinguidos representantes del foro nacional e invitados especiales.

El trabajo ha sido elaborado por el Centro de Estudios Constitucionales del TC que dirige el magistrado Gerardo Eto Cruz con la colaboración del PNUD en el marco del proyecto "Apoyo en la ejecución del Plan Estratégico del Tribunal Constitucional del Perú 2009-2012". El magistrado Eto dijo que el Disco Multimedia Interactivo, será una herramienta electrónica de mucha utilidad para quienes administran justicia y para los operadores del derecho.

Agregó que el Disco Multimedia contiene también todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los precedentes vinculantes expedidos por el TC, sentencias básicas y las sentencias recaídas en los procesos de inconstitucionalidad, las sumillas, un extracto del fallo, palabras claves de las sentencias, los derechos invocados, las



referencias normativas y las concordancias jurisprudenciales nacionales e internacionales, entre otros materiales de interés.

A su turno, el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Carlos Mesa, tras agradecer la colaboración del PNUD, destacó que el trabajo de sistematización está orientado a lograr un acercamiento del Tribunal con los operadores del derecho y la ciudadanía en general a fin de lograr el desarrollo del sentimiento constitucional; de modo que a la vez que se administra justicia constitucional, se intenta también realizar una

labor docente, aprovechando las bondades que brinda la tecnología que ha globalizado casi todos los acontecimientos y conocimientos de la humanidad a través del tiempo.

El titular del TC agregó que esta segunda edición de la Sistematización de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, busca también aportar al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país como institución, promover la transparencia en el sector justicia e impulsar una cultura constitucional.

Eduardo Vega Luna Defensor del Pueblo



Expresó su felicitación al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional por este gran esfuerzo de trabajar la Sistematización de la Jurisprudencia del TC que va a permitir a la comunidad jurídica, a los estudiantes y a todos aquellos interesados en todo el tema de derechos fundamentales, gobernabilidad y democracia en el país, poder tener una compilación actualizada y mucho más resumida de aquellas sentencias importantes y vinculantes del Supremo Tribunal. "Este esfuerzo hay que resaltarlo y hay que señalar que esto será sin duda una contribución importante para que el derecho en el Perú, la democracia y el estado constitucional avancen y se fortalezcan cada vez más", puntualizó la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo.

Enrique Mesa Angosto Presidente del Tribunal Supremo Militar Policial



Tras destacar el esfuerzo del Tribunal Constitucional en este trabajo, señaló que se trata de una herramienta importante que servirá de consulta permanente para todas las instituciones ligadas a la justicia, así como abogados y estudiantes de derecho. Comentó que es bueno que el Tribunal utilice la modernidad para poder mostrar a todos los interesados de su jurisprudencia a través de este Disco Multimedia Interactivo. Además dijo que esta recopilación de las 662 mejores sentencias será de gran ayuda para los jueces y fiscales porque tendrán a la mano una herramienta judicial que utilizarán para dictar sus sentencias. Felicitó al TC por este lanzamiento que no hace más que contribuir con el esfuerzo de todos de mejorar la justicia en el país.

Samuel Abad Yupanqui Abogado



Dijo que esta iniciativa es importante porque facilita el acceso de la jurisprudencia del TC a la ciudadanía. Se trata de un material que busca divulgar la labor del Tribunal de la mejor manera, porque hoy la información no sólo se divulga en libros sino en un CD, en este caso a través de un Disco Multimedia Interactivo. No todo el mundo conoce el derecho ni todos conocen la jurisprudencia en consecuencia es clave que el Tribunal Constitucional pueda establecer los mecanismos de acceso de manera sencilla como es un CD para que todas las personas como jueces, abogados y estudiantes de derecho puedan acceder a la jurisprudencia del TC. "Por eso hay que felicitar la iniciativa del Tribunal Constitucional de facilitar el acceso de su jurisprudencia y sus decisiones a todas las personas que quieren acceder a ellas".

ÍNDICE

Matrícula:

Ejercicio de la docencia por profesionales con título otorgado al de educación

PÁGINA 2

CSJ:

Doctor Juan Vergara presentó libro "Mis votos como juez del Tribunal Constitucional"

PÁGINA 6

Jurisprudencia Constitucional:

Protestantes con títulos distintos al de educación podrán ejercer la docencia en áreas afines a su especialidad

PÁGINA 3

Programa Tus Derechos:

El Centro de Estudios Constitucionales es un soporte para la divulgación de la jurisprudencia del TC

PÁGINA 7

Jurisprudencia Constitucional:

Hábillosa Oropesa del Inlandos Juan José Díaz que podía reclamar la investigación fiscal y policial sin reclamar por el TC

PÁGINA 4

Noticias Constitucionales:

TC realizó en Lima audiencias públicas de Pleno y salas debatiendo al voto 520 procesos en el mes de octubre

PÁGINA 8

Columna del Director

Carlos Mesía



Ejercicio de la docencia por profesionales con título distinto al de educación

En la sentencia recaída en la demanda de inconstitucionalidad N° 0014-2010-PT/TC, formulada por el Colegio de Profesores del Perú contra la Ley N° 29510, el Tribunal ha considerado que, a la luz del artículo 15° de la Constitución, no hay cuestionamiento de constitucionalidad en el hecho que, conforme la Ley General de Educación, los profesionales con título distinto al de Educación y que no están en la carrera pública magisterial, puedan ejercer la docencia en áreas afines a su especialidad, siempre que las necesidades de atención del derecho a la educación lo justifiquen.

Los demandantes solicitaban se declare inconstitucional, la precitada Ley, afirmando que ésta permite el ejercicio docente de los profesionales sin título pedagógico, lo que a su juicio, contraviene los artículos 15° y 51° de la Constitución, que sólo permiten la docencia, por lo menos en la Educación Básica, a quienes poseen título profesional de profesor, al ser estos los únicos que cuentan con una carrera pública del profesorado.

Por cierto, en el presente caso, el Tribunal no está negando que el legislador pueda ir hacia un régimen en el que todos los docentes en la educación pública tengan título profesional de profesor y formen parte de la carrera pública magisterial, pero tanto éste como el régimen actual -como ya se ha dicho-, responden a la libertad de configuración que la Constitución, en su artículo 15°, otorga al legislador para establecer los requisitos para desempeñarse como profesor, así como sus límites que le impone al propio texto constitucional.

Siendo así, al resolver la controversia, el TC fue de la opinión que el artículo 1° de la Ley N° 29510, no es inconstitucional al permitir que profesionales con título distinto al de Educación, sin la consecuente colegiación en el CPP y por lo tanto, no perteneciendo a la carrera pública, ejerzan la docencia en áreas afines a su especialidad.

Debemos concluir que la carrera pública del profesorado o magisterial, a la que hace referencia el mencionado artículo 15° de la Constitución, está integrada por docentes con título profesional en Educación. Sin embargo, de lo no puede automáticamente inferirse, como lo hace el demandante, que existe una prohibición absoluta de ejercer la docencia en la enseñanza oficial para quien cuente con otro título profesional, en áreas afines a su especialidad o sin formar parte de la carrera pública magisterial.

Presidente del TC Carlos Mesía sustentó proyecto de presupuesto de 2012 en la Comisión de Presupuesto del Congreso

Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, sustentó el proyecto de presupuesto de la institución para el año 2012 ascendente a 26,930,803 nuevos soles.

El titular del TC explicó ante la presidenta de la Comisión de Presupuesto, congresista Mariel Espinoza, que dicha cifra se distribuye de manera porcentual por actividades. En el rubro Justicia 75.40 %, Gestión Administrativa 16.30 % y Asistencia y Prevención Social 8.30 %.

Por otro lado, Mesía indicó que el ingreso de expedientes por departamentos se distribuye de la siguiente manera: Lima 52.14%, Lambayeque 6.44%, Junín 5.73%, Arequipa 5.67%, La Libertad 5.06%, Arequipa 3.90%, Piura 3.72%, Ica 3.52%, Huancayo 2.65%, entre otros departamentos.

Agregó que desde la instalación del Tribunal



Constitucional, el 24 de junio de 1996, hasta el 6 de octubre del 2011 han ingresado 72,055 expedientes. Los que luego se han resuelto 70,432 casos y se han publicado 69,103 resoluciones. Asimismo, en lo que va del año se han realizado 67 audiencias públicas, tanto en Lima como en Arequipa, en las cuales se han visto 3,466 causas.

Durante su presentación, el presidente del

TC aprovechó la oportunidad para dar a conocer los diferentes proyectos que tiene examinando la institución que dirige, como son el expediente virtual, la versión animada de la Constitución para niños, la sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otros.

El Perú debe respetar del sistema interamericano de protección a los DDHH, afirmó el vicepresidente del TC Ernesto Álvarez

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda al referirse al problema planteado por las recomendaciones de la Comisión Interamericana de DDHH sobre el caso de la operación Chavín de Huantar, indicó que el Estado peruano debe asumir una correcta defensa de los efectivos militares que cumplieron una misión reglamentaria, coherente con el marco constitucional y legal, sin que esto signifique el desmoronamiento de las normas del Sistema Interamericano.

Para Álvarez Miranda no puede desconocerse que el mandato de la Constitución que impone al legislador a investigar cualquier hecho que pudiera suponer una afectación a los derechos, procesar si hubiera indicios de responsabilidad y sancionar si el hecho se hubiera probado y se acreditan



Señaló que en 1992 se había cometido un error al resolver la competencia a favor del Fuerzo Militar, para los comandos que ejecutaron la misión militar, pues la

doctrina jurídica del Sistema considera que por tratarse de un bien jurídico como la vida, los hechos deberían ser evaluados por la jurisdicción común; si ello se hubiera realizado así y de acuerdo con los fundamentos de la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, el grupo comando que tanta admiración y respeto ha conllevado en el mundo entero, hubiera sido investigado y, al no encontrarse indicios de responsabilidad penal, estaría ya su debido.

Advertió que las recomendaciones de la CIDH, cuando no son acatadas y cumplidas, generan necesariamente la denuncia ante la Corte Interamericana, por lo que el Estado peruano debería evaluar sus alternativas con cuidado a fin de no enfrentar posteriormente una derrota judicial que perjudique no sólo a los efectivos militares sino a la sociedad peruana en su conjunto.

Expresan reconocimiento al TC por la sentencia que establece nuevo precedente en materia de arbitraje

Destacados juristas expresaron su satisfacción y reconocimiento por el esfuerzo desplegado por los integrantes del Tribunal Constitucional para establecer reglas claras y predecibles que permitan el desarrollo de una jurisdicción arbitral segura y confiable.



Seludán que al haber aprobado el presidente viceministro en la Sesión 0142-2011-AA/TC, publicada el 26 de noviembre de 2011, dio un paso importante para la consolidación del arbitraje sin dudar una adecuada protección de los derechos fundamentales.

"Es digno de encomio la respuesta positiva de los señores miembros del TC a las objeciones formuladas en anterior

oportunidad y que han sido resueltas y debidamente aclaradas con claridad y probada dedicación", señala parte del comunicado.

Confiamos en que el Tribunal consolidará este esfuerzo aplicando de manera estricta los criterios que ha definido. Esperamos también que el Poder Judicial, los

centros arbitrales, los árbitros, los abogados en ejercicio y las partes en general respeten los criterios establecidos, contribuyendo así a seguir consolidando el arbitraje como un sistema confiable y eficiente de solución de conflictos.

El comunicado lo suscribieron los doctores Daniel Amado, Ana María Artariz, Alfredo Bullard, Fernando Cantuarias, Juan Luis Avendaño, Natalé Amparo, Domingo García Delgado, Fernando De Trazegnies, Aurelio Loree de Mola, Felipe Osterling, Mario Pasco, Jorge Santisteban, Hugo Solórzano, Fernando Vidal, entre otros destacados abogados.

Síguenos en Facebook y en Twitter

El Tribunal Constitucional ingresa al mundo de las redes sociales, por ello invitamos a la comunidad jurídica y público en general, a unirse a nuestra Red Social en FACEBOOK y TWITTER. Búscanos en FACEBOOK como Tribunal Constitucional y en el TWITTER como @TC.PERU. También puedes seguirnos ingresando a la página web del tribunal www.tc.org.pe y hacer clic en el botón de



Jurisprudencia constitucional

Profesionales con títulos distintos al de educación ejercer la docencia en áreas afines a su especialidad

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Profesores del Perú, contra la Ley N° 29510 y en consecuencia estableció que los profesionales con títulos distintos al de educación y sin el requisito de colegiación, podrán ejercer la docencia en áreas afines a su especialidad, la misma que reafirma lo previsto en la Ley de Educación.

El Colegio de Profesores del Perú fundamentó su demanda contenida en el Expediente N° 0014-2010-PVTC, en que la referida ley contraviene los artículos 15° y 51° de la Constitución Política del Perú que establecen que el profesorado es carrera pública y la Ley del Profesorado precisa que es requisito para el ingreso a dicha carrera pública poseer título profesional de profesor, por lo que resulta indubitable y fehaciente que el ejercicio docente, al menos en la Educación Básica debe ser ejercido sólo por quienes ostentan el título profesional de profesores.

El Tribunal consideró que si bien la carrera pública del profesorado, a la que hace referencia el artículo 15° de la Constitución, está integrada por docentes con título profesional en Educación, ello no puede automáticamente inferirse, como hace el demandante, que existe una prohibición absoluta de ejercer la docencia en la enseñanza oblicua para quien cuente con otro título



profesional, en áreas afines a su especialidad y formar parte de la carrera pública magisterial.

Agregó que la provisión legal que los profesionales con título distinto al de Educación pueden desempeñar la docencia no es nueva. La Ley del Profesorado (N° 24029), de 1984, contempló el ejercicio de la docencia de los no profesionales en Educación, situación que ha sido mantenida por la Ley General de Educación (N° 28044) de 2003.

El Tribunal observó que si bien la demanda está dirigida, en general contra la Ley N° 29510, que

consta de cuatro artículos, sin embargo, los argumentos están dirigidos únicamente a la regulación contenida en el artículo 1° de dicha ley.

En ese sentido, el TC no observa en la demanda argumentos para cuestionar la constitucionalidad del artículo 2° que regula un régimen especial y temporal para el ejercicio de la docencia en el sector privado de los profesionales universitarios extranjeros; tampoco el artículo 3° que señala los requisitos que deben cumplir tales profesionales extranjeros para la enseñanza en la educación básica en el sector privado, ni del artículo 4°, que trata sobre la vigencia de la ley impugnada.

Primer nivel de protección de derechos fundamentales corresponden a los jueces

El primer nivel de protección de los derechos fundamentales, le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de procesos judiciales ordinarios, precisó el Tribunal Constitucional al declarar improcedente la demanda de amparo del Expediente N° 03191-2011-PA/TC, por existir otras vías igualmente satisfactorias para la tutela del derecho reclamado.

Conforme al artículo N° 138 de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizarán una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidas por la Constitución.

El Colegiado reafirmó que de conformidad con el Código Procesal Constitucional, no proceden las demandas constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. Por ello, si hay una vía efectiva para el mantenimiento de la temática propuesta por el demandante, el caso es la excepción del amparo, que constituye un mecanismo extraordinario.

Sostener lo contrario, significaría afirmar que el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a efectuar el control difuso conforme a su artículo 138°.

En consecuencia, señala el TC, solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la tutela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo.

Declaran inconstitucional ordenanza regional del Cusco que consideró inadmisibles los denuncios mineros en la región

Fundada fue declarada por el TC la demanda de inconstitucionalidad contenida en el Expediente N° 0009-2011-PVTC interpuesta por el presidente de la República representado por el ministro de Energía y Minas contra la Ordenanza Regional 005-2009-CR/GRC del Cusco; en consecuencia inconstitucional la citada norma de dos artículos, que declaró como dres de no admisión de denuncias mineras todo el territorio de la región, "por su trascendencia histórica y estar

dedicados de manera exclusiva a la actividad agropecuaria".

El Tribunal señala que el artículo 66° de la Constitución dispone que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular el derecho a su explotación de acuerdo a la ley.

Por su parte el artículo 1° de la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, regula el régimen de utilización de los mismos, en tanto constituyen patrimonio de la Nación, estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares, en cumplimiento del mandato contenido en los artículos 66° y 67° del Capítulo II, Título III, de la Constitución.

En el presente caso, se ha cuestionado la competencia de la Ordenanza Regional

emitida por el Gobierno Regional de Cusco para declarar a toda la Región Cusco como área de no admisión de denuncias mineras. A juicio del Tribunal Constitucional la objeción de constitucionalidad tiene fundamento, pues el artículo 181° del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, establece que son atribuciones de la Dirección General de Minería, entre otras, evaluar y dictaminar respecto de las solicitudes de áreas de No Admisión de Denuncias.

El TC subraya que, según la Constitución y el bloque de constitucionalidad, el órgano a quien corresponde la evaluación para la autorización de áreas de admisión de denuncias, es el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, omitiéndose dicha instancia de evaluación y desconociéndose que se trata de una competencia compartida, cuyo ejercicio debe realizarse, conforme a ley y en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales, el Gobierno Regional del Cusco, emitió la Ordenanza, lo cual constituye una violación indirecta del inciso 7° del artículo 180° de la Constitución.



Tribunal reiteró una vez más prohibición de importación de automóviles usados

Una vez más el Tribunal Constitucional reiteró la prohibición de la importación de automóviles usados, tras rechazar por improcedente la demanda de amparo contenida en el Expediente N° 01280-2011-AA/TC formulada por la empresa Import Export Virreaz S.A., solicitando que en ejecución de la sentencia se le ordene a la SINAT, continúe con el mecanismo que ha venido utilizando hasta la fecha para la importación de un lote de vehículos.

A la luz de lo precitado, el Colegiado consideró que el pedido de ejecución resultaba desestimable, por cuanto los vehículos que la empresa demandante pretende importar, al 19 de septiembre de 2000, no se encontraban en tránsito hacia el Perú, o en depósito de los CETECOS o en proceso de despacho, esto es, que no se encuentran amparados por la sentencia emitida en el Expediente N° 0910-2001-AA/TC, artículo por el cual el Tribunal concluye que aquella se ha ejecutado en sus propios términos.

Esta sentencia se suma a la expedida hace unos días donde el Tribunal Constitucional rechazó la pretensión de un grupo de personas naturales y expensas de autopartes a seguir importando los repuestos, contenida en el Expediente N° 00863-2011-PA/TC del caso Nippon Auto Park S.R.L., y otros, así como en su sentencia del Expediente N° 04197-2010-PA/TC, del caso de la empresa importadora Formosa S.R.L.



TC dejó sin efecto instalación de la sede del Gobierno Regional de Lima en la ciudad de Cañete

El Tribunal Constitucional, integrando los decisiones emitidas por la Corte Superior de Justicia de Huancayo, dejó sin efecto las resoluciones judiciales expedidas por la Corte Superior de Justicia de Cañete que ordenaban la instalación de la sede del Gobierno Regional de Lima en la ciudad de San Vicente de Cañete.

Regional de Lima en contra de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Cañete quienes, basándose en el artículo 32° de la Ley de Bases de la Descentralización, interpretaron que la sede del Gobierno Regional de Lima debía estar ubicada en la ciudad de San Vicente de Cañete.

Consigniamente a ello, el Colegiado interpreta en su sentencia que del artículo 32° de la Ley de Bases de la Descentralización no se desprende un mandato indubitable de que la sede del Gobierno Regional de Lima debía estar ubicada en la ciudad de Cañete.

Fue al declarar fundada la demanda de amparo contenida en el Expediente N° 04117-2010-PA/TC interpuesta por el Gobierno



Jurisprudencia Constitucional

TC dispone traslado de interno para el tratamiento de su enfermedad

El Tribunal Constitucional dispuso a la Oficina Regional de Lima del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cumplir, el día de notificación la sentencia, con trasladar a un interno del Centro Penitenciario de Ancón Piedras Gordas a otro establecimiento penitenciario más adecuado para el tratamiento de su enfermedad.

Fue al declarar fundada la demanda de habeas corpus contenida en el Expediente N° 01362-2010-PTC/TC, ordenando además, que la Oficina Regional, en el plazo máximo de 30 días naturales de notificación la sentencia, presente un informe documentado al TC en cuanto a las medidas adoptadas respecto del estado de salud en general del favorecido con el presente habeas corpus.

El Tribunal aprecia que según el interno debe completarse un procedimiento quirúrgico para recluir su intestino (icostoma) el mismo que se iba a realizar en el hospital Hipólito Unzué y que fue interrumpido a consecuencia de su traslado de penal. No obstante, el médico luego del examen, deja constancia que el interno presenta colostomía (intervención de hace 12 años), ileostomía por obstrucción intestinal (intervención quirúrgica reciente) y paraplegia del que no cabe controversia.

Según el Colegiado, es posible deducir que el interno, desde que fue trasladado al establecimiento penitenciario de Ancón, ha venido recibiendo solo paliativos, tampoco se le ha prestado atención adecuada, por ello, el Tribunal considera que la administración penitenciaria debió prever y ejecutar las medidas necesarias para la recuperación de la salud del interno, máxime si, a efectos de su traslado de establecimiento penitenciario, la dirección encargada evaluó su estado, concluyendo que proceda la aplicación del artículo 159 del Reglamento del Código de Ejecución Penal.

El principio de legalidad exige que por ley se establezcan los delitos

Como ya lo señaló en la Sentencia N° 0010-2002-AT/TC, el TC ratificó que el principio de legalidad exige que por ley se establezcan los delitos así como la delimitación previa y clara de las conductas prohibidas, así, garantiza la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal, la prohibición de la aplicación de otro derecho que no sea el estricto, la prohibición de la analogía y de cláusulas legales indeterminadas.

Así lo precisó al declarar fundada la demanda de habeas corpus contenida en el Expediente N° 01469-2011-PTC/TC, interpuesta por una ciudadana alegando que en el proceso penal que se le sigue, se emitió un auto de apertura de investigación en el que el enjuiciamiento se le atribuyó la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en modalidades específicas previsto en el artículo 296° del Código Penal, sin que esa conducta estuviera prevista en dicho artículo cuando sucedieron los hechos.

El Tribunal consideró que el principio de legalidad penal se configura también como un derecho relativo constitucional de todos los ciudadanos. Como principio constitucional, informa y limita los márgenes de actuación de los que dispone el Poder Legislativo al momento de determinar cuáles son las conductas prohibidas, así como sus respectivas sanciones.

En el caso concreto, se aprecia que se amplió al auto apertorio de instrucción, comprendiendo a la demandante en el proceso seguido por la comisión del presunto delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas y comercialización de insumos químicos farmacéuticos.

Habeas Corpus del holandés Joran Van der Sloot que pedía nulidad de la investigación fiscal y policial fue rechazada por el TC

Por la causal de improcedencia, el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de habeas corpus interpuesta a favor del holandés Joran Anderson Petrus Van der Sloot, procesado por el delito de homicidio calificado y otros, quien alegaba la violación de sus derechos.

Así lo decidió el Pleno del Colegiado al resolver la demanda contenida en el Expediente N° 02633-2011-PTC/TC, la que tenía por objeto que se declare la nulidad de la investigación a nivel fiscal y policial en el marco del proceso penal que se le sigue al favorecido, quien alega la presunta violación de los derechos a la tutela jurisdiccional, de defensa, a la presunción de la inocencia y otros.

El Colegiado ha señalado en reiterada jurisprudencia que si bien es cierto que la actividad del Ministerio Público, sea en la



investigación del delito, al formular la denuncia penal o formular la acusación fiscal, se encuentre vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo es que sus actuaciones durante la investigación preliminar son postulatorias respecto de lo que el

juzgador resuelva, en cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la libertad personal.

Es decir que, ante una eventual denuncia o acusación fiscal será el juez penal competente el que determine la restricción de este derecho que podrá corresponder al inculcado en concreto. Lo mismo ocurre con las investigaciones del delito en sede policial, y es que aún cuando la actividad investigatoria de la Policía Nacional concluya con la emisión de un atestado policial, ello no resulta decisivo para el juzgador en la imposición de las medidas de restricción de la libertad individual, conforme a la reiterada jurisprudencia del TC.

En consecuencia, corresponde en este caso, que la demanda sea rechazada, toda vez que las presuntas afectaciones a los derechos constitucionales reclamados, en el marco de la investigación fiscal y policial del delito que se cuestiona en el proceso, no incide de manera directa y negativa en el derecho a la libertad personal del demandante.

El derecho a la libertad religiosa no es un derecho absoluto sino que es susceptible de restricciones

El reconocimiento constitucional del derecho fundamental a profesar una religión, da lugar también al derecho a practicar los actos de culto y a recibir la asistencia religiosa sin que se atente contra el orden público o contra la moral pública. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus, interpuesta por Anilda Noeña, quien alegaba la violación de su derecho a la libertad religiosa al restringirle el acceso de la Biblia los días de visita al penal de Sullana.

En el presente caso, contenido en el Expediente N° 03045-2010-PHC, la favorecida ventó ejerciendo su derecho a la libertad religiosa, debido a que se le brinda las facilidades como el establecimiento de un horario

para oración o rezo todos los días de la semana e incluso permitiendo el ingreso de un hombre.

El Colegiado precisó que la restricción del acceso de la Biblia a los visitantes los días sábados y domingos (días de visita) no supone la prohibición del acceso de la Biblia, pues ella cuenta con una Biblia en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Sullana.

Agregó que el alegato de que se vulnera su derecho a la libertad de credo y el derecho de religión, carece de un vínculo de conexidad o de incidencia negativa concreta al derecho a la libertad personal, lo pretendido resulta manifiestamente incompatible con la naturaleza del proceso constitucional de habeas corpus, por lo que en este extremo la demanda debe ser declarada improcedente, de conformidad con el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional.

El derecho a la libertad religiosa, al igual que los demás derechos fundamentales, no es un derecho absoluto, sino que es susceptible en su ejercicio, sin que ello suponga que las eventuales restricciones queden libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad. En todo caso, la legitimidad de tales restricciones radica en que deben ser dispuestas con criterios objetivos de razonabilidad y proporcionalidad.

Habeas corpus no puede servir para determinar la responsabilidad penal de los procesados ni valorar las pruebas que acreditarían la responsabilidad

El Tribunal Constitucional reafirmó que el proceso de habeas corpus no puede servir para determinar la responsabilidad penal de los procesados, ni valorar las pruebas con las que se acreditarían o no su responsabilidad. Así lo precisó al declarar fundada la demanda del Expediente N° 01960-2011-PTC/TC, a favor de Luis Humberto Arroyo Rojas, alegando la vulneración de los derechos al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual.

El Colegiado señala que los argumentos expuestos en la demanda, con los que se cuestiona el testimonio de una testigo, supuestamente dado bajo presión, y el posterior cambio de versión; así como el que las pesquisas realizadas por la policía fueron manipuladas, constituyen argumentos orientados a desvirtuar las pruebas que acreditarían la sustanciación participativa del favorecido en el delito imputado y que deben dilucidarse exclusivamente en el proceso penal.

De conformidad con el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, se establecen como

requisitos para el dictado del auto de apertura de instrucción que de los actuados aparezcan indicios suficientes o elementos de juicio revalorados de la existencia de un delito, que se haya individualizado a los inculcados y que la acción penal no haya prescrito o no concorra otra causa de extinción de la acción penal.

El Tribunal, señala que de la exposición de los hechos se advierte la descripción fícticia del evento delictivo y la vinculación del favorecido con la comisión del ilícito, es decir, se le atribuye al favorecido ser autor intelectual del atentado en contra de Ezequiel Dionisio Nolasco Campos por un móvil político, por las denuncias de corrupción en el Gobierno Regional de Ancash, conforme a la declaración de la testigo, la propia declaración del agraviado que la acusó de ser autor intelectual del atentado en su contra y las llamadas que desde su celda había realizado.

Además, debe tenerse en cuenta que la finalidad del auto apertorio es dar inicio al proceso penal, por lo que no puede exigirse en dicha instancia el



mismo grado de exhaustividad en la descripción de los hechos y el análisis de las pruebas, que si se reclama en una sentencia, que es el momento en el que se determina la responsabilidad penal del imputado, luego de haber realizado una intensa investigación y de haber actuado las pruebas presentadas por las partes.

Jurisprudencia Constitucional

Citas para lectura de sentencia no configura amenaza o violación del derecho a la libertad individual



No se produce amenaza o vulneración del derecho a la libertad personal cuando se procede a la citación para la lectura de sentencia y la citación de las partes a la audiencia de lectura no significa por sí mismo un adelanto de opinión o una

amenaza cierta e inminente de la libertad personal, pues el proceso está en la obligación de acudir al local del juzgado cuantas veces sea requerido, precisó el Tribunal Constitucional conforme a su actuación jurisprudencial.

Así lo reafirmó al declarar improcedente la demanda de habeas corpus contenida en el Expediente N° 02342-2011-PHC/TC, formulada por Manuel Gómez Tesheyra, solicitando que se declare la nulidad de la resolución mediante la cual el juez penal señaló fecha para la lectura de sentencia en el proceso que se le sigue y se ordena una serie de actuaciones previas.

El Tribunal precisa que dentro de un proceso constitucional del derecho a la libertad personal,

como es el habeas corpus, el Colegiado debe pronunciarse sobre la eventual vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva, debido proceso y a la defensa, también lo es que ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre estos derechos y el derecho fundamental a la libertad individual.

Por consiguiente, la citación para la lectura de sentencia, cuya nulidad se solicita, no configura una amenaza o vulneración del derecho a la libertad individual del demandante, y menos sin recurrir al propio juzgado y proceso penal en el que se ha dado el acto procesal cuestionado. Por lo tanto, es de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal Constitucional que establece que la demanda debe ser declarada improcedente cuando la reclamación no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el derecho a la libertad individual.

Según ley marco del empleo público el proceso de selección se inicia con la convocatoria y culmina con la suscripción del contrato

El Tribunal Constitucional señaló que de conformidad con la Ley N° 28175 -Ley Marco del Empleo Público-, "el proceso de selección se inicia con la convocatoria que realiza la entidad y culmina con la resolución correspondiente y la suscripción del contrato...". Así lo precisó al declarar fundada la demanda de cumplimiento (Expediente N° 01263-2011-PC/TC) cuando ha habido acreditado la vulneración del derecho a la eficacia de la norma legal y comprobada la renuencia en cumplir el mandato contenido en la precitada ley.

En consecuencia, se ordena al Congreso de la República que, en un plazo máximo de diez días hábiles de notificada la presente sentencia, ordene a Anabel Diez Navarro como trabajadora a plazo indeterminado en el cargo de Especialista Parlamentario. La demandante participó en un concurso convocado por la parte demandada para cubrir 13 plazas vacantes y obtuvo una de ellas, no obstante aún no se ha suscrito el respectivo contrato de trabajo.

A criterio de las instancias judiciales de primer y segundo grado, la demanda debe ser declarada improcedente porque el mandato cuyo cumplimiento se requiere, está sujeto a una controversia compleja. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional estima que:



el mandato contenido en la Ley no genera controversia compleja alguna, pues no está sujeta a interpretaciones dispares, ni necesita la actuación de medios probatorios para generar certidumbre y certeza sobre la fundabilidad de la pretensión demandada.

Agrega que solo corresponde analizar si el demandante participó en un concurso público y abierto para acceder a la Administración Pública, toda vez que ello prueba la existencia de una plaza presupuestada y vacante, y si ganó la plaza a la que postuló, por cuanto resultó inaneable y contrario a la Ley Marco del Empleo Público, convocar a un concurso cuando no existen plazas vacantes y presupuestadas.

Previsada la falta de razonabilidad de los argumentos utilizados por las instancias judiciales para rechazar la demanda, este tribunal estima que los instancias judiciales han incurrido en un error al momento de calificar la demanda, por lo que debería revocarse el auto de rechazo liminar y ordenarse que se admita a trámite.

No obstante ello, el TC considera pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que el Parlamento ha sido notificado del conceso del recurso de apelación, su Procurador Público se ha apersonado ante esta instancia y ha informado en la vista de la causa del presente proceso, lo que implica que su derecho de defensa ha sido ejercido.

El rechazo liminar procede cuando no haya duda sobre verosimilitud respecto de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental

Como ya se ha sostenido en reiteradas oportunidades el uso de la facultad del rechazo liminar de una demanda constitucional constituye una alternativa a la que sólo cabe acudir cuando no exista ningún margen de duda respecto de la carencia de elementos que generen verosimilitud sobre la amenaza o vulneración de un derecho fundamental, lo que supone, por el contrario, que cuando existen elementos de juicio que admitan un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del dispositivo que establece tal rechazo liminar resulta improcedente.

Así lo reafirmó el Tribunal Constitucional (TC), al revocar las resoluciones judiciales de primera y segunda instancia, ordenando admitir a trámite la demanda contenida en el Expediente N° 03321-2011-PHC/TC, interpuesta por Rafael Tapara Antay y otros, notificándose a las partes procesales.

Al respecto, el Tribunal señala que no comparte los argumentos de las instancias jurisdiccionales precedentes, estimando que los hechos alegados por los recurrentes tienen incidencia

constitucional directa sobre los derechos fundamentales de los demandantes. En consecuencia, corresponde que la demanda sea admitida a trámite, y que el juez a cargo de la causa realice las diligencias que estime necesarias para la mejor resolución del proceso.

En el presente caso, y teniendo en cuenta que las resoluciones impugnadas se han producido incurriendo en un vicio procesal ausente de aplicación trascendentalmente la decisión de primera y segunda instancia, resulta de aplicación al caso lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal Constitucional que establece "Si el Tribunal considerara que la reclamación impugnada ha sido producida incurriendo en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la causa, la anulará y ordenará se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio...".



Los juicios de reproche penal de culpabilidad no están referidos al contenido constitucionalmente protegido al derecho de la libertad personal

El Tribunal Constitucional (TC) estimó que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, así como la valoración de las pruebas penales y su suficiencia no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda vez que son asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no competen a la justicia constitucional, que se encarga de examinar casos de otra naturaleza.

Así lo precisó el Tribunal al declarar improcedente la demanda de habeas corpus contenida en el Expediente N° 02417-2011-PHC/TC, interpuesto por un condenado a 35 años de pena privativa de la libertad por el delito de violación sexual a menor de edad. Sostiene que es inocente y que ha sido condenado a pesar que las pericias medicolegales indican que la menor no sufrió ningún daño.

El Tribunal advierte que en el presente caso, lo que en realidad pretende el demandante es que se lleve a cabo un recurso de la sentencia condenatoria y su posterior confirmación por resolución de la Corte Suprema.

De otro lado, en cuanto al extremo de la presente demanda que pretenda la nulidad de resoluciones judiciales sustentada en alegatos de mera legalidad, éstos no pueden dar lugar a un pronunciamiento de fondo, máximo si la copia simple que el demandante adjunta de la supuesta sentencia que habría sido destruida, no genera verosimilitud.

A mayor abundamiento, en cuanto al alegato de que desde la investigación policial se sustenta la falsa información que dio lugar al atentado policial y posteriormente la denuncia penal, el TC veta señalando en su jurisprudencia que si bien es cierto que la actividad del Ministerio Público, en la investigación del delito, al formalizar la denuncia penal o formular la acusación fiscal, se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al derecho al debido proceso, también lo es que sus actuaciones en la investigación preliminar son postulatorias frente a lo que el juzgador resuelve en cuanto a la imposición de las medidas coercitivas de la libertad personal.

El amparo no es la vía para dilucidar desavenencias de orden societario

Tratándose de la impugnación de un acuerdo societario, el proceso de amparo no es la vía, puesto que existen normas específicas que prevén la forma en que puede ser cuestionado, existiendo para ello vías igualmente suficientes para resolver la desavenencia, señaló el Tribunal Constitucional. Así lo precisó al declarar improcedente la demanda contenida en el Expediente N° 03451-2011-PAT/TC, interpuesta por Gil Avila Márquez y otros, contra el gerente de una empresa de transportes, aduciendo la violación de su derecho al trabajo.

Los demandantes refieren que ellos son fundadores de la empresa desde su creación, teniendo la posesión de poderlos otorgados en el área territorial de la municipalidad de Los Olivos, donde venían trabajando con sus unidades móviles; y que en el año 2008 renunciaron a sus acciones a condición de continuar trabajando en los paraderos que poseían.

Manifiestan que la empresa aceptó sus acciones, pero les indicaron que no era posible que sigan trabajando en los aludidos paraderos; frente a esto, los demandantes critican que sus renuncias a la sociedad no surten efecto y se desisten de ellas; sin embargo, y sin previo aviso, la empresa les denegó la posibilidad de cancelar sus renuncias a sus acciones.

Asimismo, alegan que de modo unilateral y abusivo se les excluye de la sociedad y de su calidad de conductores, a decir, de sus trabajos, sin orden judicial ni mandato de autoridad competente, por lo que optaron por interponer el presente proceso de amparo.

Finalmente, el Tribunal señala que cabe precisar que lo que en realidad se está discutiendo en el presente caso, es la titularidad de un derecho sobre explotación de determinados paraderos. Sin embargo, a lo largo del proceso no se ha presentado documentación alguna con la que se acredite que efectivamente los demandantes son los titulares de tal derecho, por lo que la demanda deviene en improcedente por carecer de las vías igualmente satisfactorias para dilucidar sus controversias.

Centro de Estudios Constitucionales

Diplomado en "Proceso y Constitución"

El CEC del Tribunal Constitucional inició el sábado 29 de octubre su Diploma de Especialización en Proceso y Constitución, programa académico dirigido a profesionales del derecho y a docentes universitarios. La conferencia inaugural estuvo a cargo del juez constitucional Juan Vergara Gotti.

Ese día la doctora Eugenia Ariano Debo expuso el tema 1 "La Teoría general del proceso en el marco del constitucionalismo. Finalmente, a las 3 de la tarde el doctor Gilmer Alarín Requejo habló sobre el tema "Teoría de la argumentación jurídica".

El director del CEC magistrado Gerardo Eto Cruz explicó que el diploma culminará el 17 de diciembre y tiene como objetivo reconocer la teoría de la argumentación como base del razonamiento jurídico, aplicar pertinentemente a la fundamentación del proceso, reconocer la relevancia del análisis de los distintos tipos de procesos desde una perspectiva constitucional, entre otros.

Para esta ocasión se ha estructurado dos módulos, el primero "Teoría Procesal" y el segundo "Los Procesos desde la Constitución", los mismos que comprenden un total de 15 sesiones académicas (cuatro de cuatro horas presenciales) y una sección de tareas académicas que suponen la inversión de 30 horas de trabajo por parte del alumno, haciendo un total de 90 horas lectivas. El diploma tendrá como escenario el local del CEC ubicado en la calle Los Códices N° 209 en San Isidro.

Taller en Madre de Dios

El lunes 24 de octubre se realizó el taller descentralizado sobre Test de Proporcionalidad en la Sala Mixta y Penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. El evento académico estuvo a cargo de la doctora Paola Brindor Ortiz Rosales, asesora jurisdiccional del TC y asistieron las principales autoridades judiciales de esta región. Fue dirigido al personal de la Corte, Colegio de Abogados de Madre de Dios, Ministerio Público, abogados en general y estudiantes de derecho. El test de proporcionalidad consistió en la ponderación de los derechos que se protegen al momento de resolver una causa e imponer una sanción.



En Cajamarca con el Ministerio Público

Con la exposición del asesor jurisdiccional Gonzalo Núñez el 27 de octubre se realizó en Cajamarca, el último taller especializado sobre el tema "Derechos fundamentales, proceso penal y control constitucional", que se inició el pasado 3 y 4 de agosto en la ciudad de Iquitos y que llegó a su fin el viernes 28 con la exposición del doctor, Johan León.

Cabe puntualizar que en todas las ciudades el evento fue un éxito total, pues contó con la masiva asistencia de magistrados del Ministerio Público. El Taller de especialización fue organizado por el CEC, que dirige el magistrado Gerardo Eto Cruz del Tribunal Constitucional y la Escuela del Ministerio Público.

Los talleres se realizaron en las ciudades de Iquitos, Chiclayo, Piura, Lima, Huesco Café y ahora en Cajamarca.

El magistrado Eto Cruz indicó que el taller estuvo dirigido exclusivamente a fiscales en lo penal y su metodología fueron las exposiciones y talleres de estudio de casos concretos, y tuvo como objetivo el análisis de los alcances del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales en el ámbito del proceso penal, desde la perspectiva de la jurisdicción del Tribunal Constitucional.

Informativo Mensual

DIRECTOR GENERAL

Carlos Mesia
Presidente del Tribunal Constitucional

Doctor Juan Vergara presentó libro "mis votos como juez del Tribunal Constitucional"

Con la asistencia de importantes autoridades judiciales, juristas, académicos e invitados especiales, el juez constitucional Juan Francisco Vergara Gotti presentó su libro "Mis votos como juez del Tribunal Constitucional" en una ceremonia realizada en la sede del Supremo Tribunal.

El presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesia fue el encargado de dar las palabras de bienvenida, quien destacó los valiosos aportes del doctor Vergara Gotti. Recordó su paso por el Poder Judicial y su dedicación y entrega como juez constitucional y sus acertadas intervenciones en los debates previos a la toma de decisiones, respecto de las causas llegadas a esta suprema instancia y su permanente posición en temas de suma importancia al momento de votar.

A su turno el ex presidente del TC y ex ministro de Justicia, doctor Víctor García Toma, al presentar la obra del doctor Juan Vergara, destacó los méritos profesionales del autor del libro, donde se pueden apreciar sus votos singulares y donde hace gala no solo de sus variados conocimientos jurídicos para resolver los procesos llegados a la sede constitucional, sino de su extraordinaria visión y notable experiencia como juzgador, esta vez constitucional.

Por su parte, el doctor Vergara expresó su agradecimiento a todos las autoridades y



amigos que asistieron a esta ceremonia y dijo que el libro representa sus votos singulares que los pone a disposición de los profesionales del derecho.

En la obra participan distinguidos constitucionalistas que se suman al esfuerzo del juez Vergara Gotti durante sus más de cinco años en el Tribunal Constitucional. Entre ellos figuran los doctores Samuel Abel Yupanqui, Juan Luis Avendaño Valdéz, Juan Bardelli Laritaviguey, Ernesto Hume Fortini, Joseph

Campos Torres, Omar Cairo Roldán, José Herrera Robles, Víctor García Toma, Luciano López Flores, Enrique Postana Uribe, Amalio Quiruga León, Sara Tapia Chávez, Francisco Yávara Córdoba y Javier Valle Riestra.

La ceremonia realizada en la sede del Tribunal contó con la presencia de los magistrados Ernesto Álvarez Miranda y Oscar Orvillola Hani. Asimismo autoridades judiciales, políticos, académicos y juristas.

Magistrados del TC ofrecieron conferencias a universitarios de la Católica de Santa María y San Agustín de Arequipa



Carlos Mesia, dirigida a los estudiantes de la facultad de derecho de la referida casa de estudios. La presentación fue a las 6 de la tarde y contó con la asistencia del rector Abel Tapia Fernández y numerosos alumnos.

Al abordar la temática de la normalidad, el titular del TC sostuvo que es imperativo que los magistrados al momento de resolver las controversias sometidas a su jurisdicción deben anteponer lo dispuesto por la

Constitución antes que la ley. Finalmente, el doctor Mesia entregó el CD multimedia con la recopilación de las mejores sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional desde su instalación, actualizada hasta julio del presente año. Al agradecer la asistencia de los jóvenes alumnos, los invitó a ser amigos del Tribunal Constitucional y seguir sus actividades a través de su página en facebook.

A la misma hora, el director general del CEC, magistrado Gerardo Eto

desertó sobre el tema "El proceso constitucional de amparo en el ámbito de la facultad de derecho de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Asimismo, participaron como panelistas los doctores Francisco Celi Mendoza Ayala, Luis Madrigal Condoni y Floy Zamalón Campero, los tres son jueces de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

De acuerdo con el programa también expuso el doctor Jorge Luis Caceres Arce, docente de post grado de la UNSA. Asimismo, participaron como panelistas los doctores Francisco Celi Mendoza Ayala, Luis Madrigal Condoni y Floy Zamalón Campero, los tres son jueces de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.



En el auditorio académico Reverendo Padre Williams Murillo de la Universidad Católica de Santa María se ofreció la exposición "El carácter normativo de la Constitución" a cargo del presidente del TC

EDITOR:
Gregorio Mattos
REDACCIÓN:
Carlos Rojas y Mariela Franco

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N.º 2009-05639
Colaboradores: Giancarlo Cresci
Diagramación: Christian Guerra
Año 3 N.º 31, octubre 2011 - Traje: 10,000 ejemplares

Programa Tus Derechos

El Centro de Estudios Constitucionales es un soporte para la divulgación de la jurisprudencia del TC

El Tribunal Constitucional tiene como soporte al Centro de Estudios Constitucionales para la divulgación de su jurisprudencia, el cual se realiza a través de los diplomados, cursos, seminarios y eventos académicos de toda naturaleza, así como con la publicación de investigaciones que se desarrollan en el seno del propio Tribunal, afirmó el doctor Gerardo Eche Cruz, magistrado y director del CEC.

Recordó que desde los años 70 se desarrolló en el Perú un boom en las ciencias sociales a propósito de la experiencia del régimen del general Velasco Alvarado, que luego entró en declive. Velma que se abordó en el programa fue "Investigación, ciencia y tecnología".

"Una de las vertientes disciplinarias que viene tomando bastante repunte es el campo jurídico, en especial el derecho constitucional. En por una que de una u otra manera el Centro de Estudios Constitucionales viene realizando una serie de aportes no solo para que se pueda entender lo que el Tribunal Constitucional emite a través de los fallos jurisprudenciales sino de cómo es la argumentación que tiene entre los entrelazados de lo que es la impartición de la justicia", destacó el director del CEC.

Como recomendación para adoptar el hábito de la investigación, el magistrado señaló que es necesario disciplinar el cuerpo y la mente para tener un buen espacio dentro del laboratorio del tiempo y disponer de ese tiempo para poder enfrentar retos académicos ya

que en realidad el tiempo es vida y lo que tiene que hacer el académico es buscar los tiempos que animicamente se pueden aprovechar y a partir de ahí simplemente desarrollar su vocación.

En lo que le corresponde al Tribunal Constitucional, éste cumple dos labores: una es la labor de emitir los fallos que resuelven los conflictos y el Centro de Estudios Constitucionales le brinda celeridad de argumentación y lo que es la divulgación de esta distinta jurisprudencia.



ENTREVISTADOS

Susana Mutari, representante del Centro de Desarrollo Ético (CDEE).
La educación no sólo es aprender a leer y escribir, sino a construir y desarrollar nuestra identidad que significa reconocerse como parte de un colectivo a que pertenecemos, desde las ansiedades hasta la futuro. Dijo que la condición de los afrodescendientes en el Perú todavía se encuentra en situación de pobreza, marginal, víctimas de la discriminación racial y en ese sentido una de las peores condiciones que puede pasar es el endocismo, que ocurre cuando un afrodescendiente no valora a otros afrodescendientes. (22/10/11)

Maribel Arrechea historiadora
El Perú está caminando hacia un proceso de una igualdad tanto en el campo ético como en el campo de género. Somos machistas y racistas, pues somos parte de un proceso en el que la sociedad peruana tiene esos rasgos porque con la República no se eliminan rasgos anteriores de cultura y castas. Destacó que actualmente se están dando nuevas situaciones en la relación del Estado y las poblaciones peruanas, pero con el tiempo nos hemos empujado en hablar de una nación peruana como si fuera una sola. (22/10/11)

Doctora Fabiola León Velarde, rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
En los últimos 20 años la situación de la investigación en el Perú se ha deteriorado, debido a que somos uno de los países que menos invierte en ciencia y tecnología en la región y el que menos produce innovación, por lo que obtenemos una mala nota en los últimos dos informes realizados por la ONU. Una de las estrategias que tiene la universidad es consolidar redes interdisciplinarias con sus alumnos y con otras universidades, así como programas que permitan atraer a fuentes de financiamiento internacional de gran calidad. (15/10/11)

Doctor Juan Jiménez Mayor, viceministro de Justicia
La importancia del acceso a la justicia es vital para un Estado constitucional y democrático porque permite que las personas puedan reivindicar sus derechos y puedan hacerlos valer ante la justicia. El Perú tiene una serie de servicios de justicia que van desde la justicia de paz que es una justicia de conciliación, una justicia comunitaria, a los juzgados campesinos y por otro lado, los servicios de justicia profesional que son parte de la justicia de paz interna hasta la Corte Suprema y el propio Tribunal Constitucional que forma parte de este sistema. (08/10/11)

Doctor Pedro Cárstelo Pastor, presidente de la Corte Superior de Justicia Lima
La población está confiando más en el sistema de justicia del como se, porque los jueces vienen resolviendo los procesos con mayor celeridad. Con la creación de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, se ha querido acercar la justicia a la población para que los justiciables tengan la justicia más rápida más eficaz y más predecible. La Corte entró en funcionamiento el 13 de octubre del 2010 con 32 juzgados jurisdiccionales, hoy tiene 38, los cuales abarcan un cargo de 54 mil procesos judiciales. (08/10/11)

Doctor Jorge Santisteban de Noriega, ex Defensor del Pueblo
Felicito al Tribunal Constitucional por el precedente que ha decidido referir al laudo arbitral, porque antes de esta sentencia había preocupación a nivel nacional e internacional de que en el Perú que tiene una excelente ley de arbitraje, se veía interferido por acciones de amparo y acciones de inconstitucionalidad. El arbitraje es una justicia privada mediante la cual las partes voluntariamente deciden no recurrir al Poder Judicial sino recurrir a árbitros particulares para tener una justicia más rápida, en donde no hay apelaciones ni recursos de nulidad. (01/10/11)

Oráculo jurídico



1. ¿Cuáles son los deberes que asumen los particulares y el Estado en una Economía Social de Mercado?

En una economía social de mercado, tanto los particulares como el Estado asumen deberes específicos, en el primer caso, el deber de ejercitar las referidas libertades económicas con responsabilidad social, mientras que, en el segundo, el deber de ejercer un rol vigilante, garantizar y corregir, ante las deficiencias y fallos del mercado, y la actuación de los particulares. (STC 01963-2005-PA/TC, fundamento 3).

2. ¿Cuáles son las características de la función orientadora del Estado en materia económica?

La función orientadora presenta las siguientes características: a) el Estado puede formular indicaciones, siempre que éstas guarden directa relación con la promoción del desarrollo del país; b) los agentes económicos tienen la plena y absoluta libertad para escoger las vías y los medios a través de los cuales se pueden alcanzar los fines planteados por el Estado; y, c) el Estado debe estimular y promover la actuación de los agentes económicos. (STC 07339-2006-PA/TC, fundamentos 16 y 17).

3. ¿Qué se entiende por función reguladora del Estado en materia económica?

La función reguladora del Estado se encuentra prevista en el artículo 58° de la Constitución, cuyo tenor es que la iniciativa privada se libre. Se ejerce en una economía social de mercados. (STC 07339-2006-PA/TC, fundamentos 12-15).

4. ¿Existe un derecho constitucional al ahorro?

Se ha reconocido, en virtud del artículo 87° de la Constitución, que el ahorro es un derecho subjetivo constitucional, pues de un lado, el Estado se encuentra obligado de apropiarse arbitrariamente de él y de otro, está obligado a garantizarlo y fomentarlo. (STC 00004-2004-AI/TC, fundamento 50).

5. ¿Qué implica el principio de subsidiariedad económica del Estado?

El principio de subsidiariedad económica del Estado implica, de un lado, un límite a la actividad estatal, pues no puede participar libremente en la actividad económica, sino que sólo lo puede hacer sujeto a la subsidiariedad, que debe ser entendida como una función supervisora y correctiva o reguladora del mercado; y, de otro, reconoce que hay ámbitos que no pueden regularse únicamente y exclusivamente a partir del mercado, lo cual justifica su función de regulación y protección. (STC 07339-2006-PA/TC, fundamentos 7-11).

6. ¿La Constitución garantiza el principio de subsidiariedad económica del Estado?

El artículo 60° de la Constitución consagra el principio de subsidiariedad económica, la cual, en su dimensión horizontal, determina una función supletoria para el Estado; esto es, el Estado no debe intervenir mientras la sociedad puede hacerlo, reservándose únicamente la función supervisora y correctora de las distorsiones del mercado, en aras del bien común. (STC 07320-2005-PA/TC, Fundamentos 7-11).

7. ¿Cuál es el rol del Estado en la economía?

De acuerdo a los establecidos en la sentencia recaída en el Expediente N° 0008-2003-AI/TC (Constitución Económica), donde se dictaron las pautas de interpretación de los principios que inspiran el régimen económico en la Constitución de 1993, se ha establecido que el rol del Estado en materia económica debe entenderse necesariamente desde la óptica del Estado Social y Democrático de Derecho. Bajo ese marco, los principios del régimen económico, constituyen normas programáticas para el legislador, quien debe buscar el equilibrio entre la subsidiariedad y la subsidiariedad social. (STC 00034-2004-AI/TC, Fundamentos 17, 18, 26-28).

8. ¿Cuáles son los elementos que permiten caracterizar a un servicio como público?

Los elementos que permiten caracterizar a un servicio como público son: su naturaleza esencial, la necesaria continuidad de su prestación en el tiempo, su naturaleza regular y que su acceso se dé en condiciones de igualdad. (STC 00034-2004-AI/TC, Fundamento 40).

Tus Derechos

Sábados

11:00 am

TV Perú



Tribunal Constitucional realizó en Lima audiencias públicas de Pleno y salas dejando al voto 539 procesos en el mes de octubre



El Tribunal Constitucional realizó seis audiencias públicas de Pleno y salas, en su local de Lima, dejando al voto 539 causas entre procesos de amparo, cumplimiento, habeas corpus y habeas data.

El Pleno del TC presidido por el magistrado Carlos Mesa e integrado por los magistrados Ernesto Álvarez (vicepresidente), Juan Vergara, Ricardo Beaumont, Fernando Calle, Gerardo Eto y Oscar Urviola, celebró dos audiencias

públicas los días 5 y 19 de octubre dejando al voto 89 procesos de garantías.

Mientras que la Primera Sala presidida por el magistrado Ernesto Álvarez e integrada por los magistrados Ricardo Beaumont y Fernando Calle, realizó tres audiencias públicas dejando al voto 273 procesos de garantías. Estos actos procesales se realizaron los días 3, 10 y 24 de octubre.

Finalmente, la Segunda Sala presidida por el

magistrado Gerardo Eto e integrada por los magistrados Juan Vergara y Oscar Urviola realizó dos audiencias públicas los días 6 y 17 de octubre dejando al voto 177 procesos de garantías. Estos actos procesales se realizaron en la Sala de Audiencias del TC, ubicada en Jr. Ancash N° 390, Lima.

En el marco de su política de transparencia, las audiencias públicas son transmitidas en vivo y pueden ser vistas a través de la siguiente dirección: www.tc.gob.pe

TC dejó al voto 173 procesos constitucionales luego de tres audiencias públicas realizadas en Arequipa

El Tribunal Constitucional dejó al voto 173 procesos constitucionales luego de celebrar audiencias públicas de Pleno y Salas, en la ciudad de Arequipa, entre ellos tres demandas de inconstitucionalidad, una de ellas interpuesta por el Poder Ejecutivo contra una ordenanza regional de Madre de Dios. Ilro uno de la pablen por parte del Poder Ejecutivo el doctor Luis Huerta Guerrero, procurador público especializado en materia constitucional.

Los magistrados constitucionales escucharon los informes orales de los abogados de las partes en litigio y también formularon las preguntas que consideraron necesarias para mejor resolver en los casos llegados a este Supremo Tribunal.

El Pleno presidido por el doctor Carlos Mesa, sesionó desde las 9 y 30 de la mañana en su sede institucional ubicada en la calle Misti N° 102 en Yanahuani. Los magistrados del Pleno vieron 3 procesos de inconstitucionalidad, 8 procesos de amparo, 7 habeas corpus y una acción de cumplimiento.

Asimismo, en forma simultánea a partir de las 11 y 30 de la mañana, la Primera Sala integrada por los magistrados Ernesto Álvarez (Presidente), Ricardo Beaumont y Fernando Calle tuvieron a su cargo la vista de la causa de 76 expedientes.



Igualmente, la Segunda Sala conformada por los doctores Carlos Mesa (Presidente), Gerardo Eto y Oscar Urviola vieron 78 expedientes entre acciones de amparo, habeas corpus, acción de cumplimiento y habeas data.

Presidente del TC Carlos Mesa participó en foro sobre acceso a la información y libertad de prensa en el Congreso



El presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesa participó en el foro "Poder Legislativo, acceso a la información pública y libertad de prensa: El Congreso de la República por la transparencia", realizado en el Palacio Legislativo.

El titular del máximo órgano de justicia constitucional fue panelista en el tema "Derechos en conflicto: Perspectivas legislativas para la despenalización de los llamados delitos de prensa" el cual tuvo como moderador a Gustavo Mohme Seminario, director del diario La República.

Asimismo, participaron el congresista y segundo vicepresidente de la República, Oscar Chedede, el viceministro de Justicia, Juan Jiménez y el ex presidente del Consejo de la Prensa Peruana, Alejandro Mari Quisada Cisneros.

En el panel de periodistas estuvieron Carlos Castro, Rosanna Cuevas y César Romero. El evento realizado en el hemiciclo Raúl Porras Barahona fue clausurado por el segundo vicepresidente del Congreso, Yehude Simon.

ACTIVIDADES



Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa asistieron a las audiencias públicas que realizó el Pleno y salas del Tribunal Constitucional en su sede de la Ciudad Blanca el 21 de octubre. Los universitarios agradecieron por esta oportunidad de presenciar las audiencias. Al término de la audiencia conversaron con el presidente del TC, Carlos Mesa Rummyer y el magistrado Oscar Urviola Hani.



El magistrado Ricardo Beaumont Calligón participó en el taller denominado "Los derechos fundamentales, proceso penal y control constitucional" que organizó el CECYJ y la Escuela del Ministerio Público en Lima. El evento académico estuvo dirigido a fiscales en la penal y su objetivo fue analizar los alcances del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales en el ámbito del proceso penal, desde la perspectiva de la jurisprudencia del TC.



En los últimos años los tribunales constitucionales del mundo han venido cumpliendo un papel importante en la medida que las reformas constitucionales se han hecho ratificando el respeto de los Derechos Humanos y los tratados internacionales, afirmó el magistrado Fernando Calle Higon, durante el "Foro internacional sobre las transiciones democráticas y procesos constitucionales en el mundo árabe", realizado en la ciudad de Rabat en Marruecos.



Un nuevo taller de inducción parlamentaria en temas relacionados a la jurisprudencia del TC se realizó con los congresistas de la bancada nacionalista Gana Perú. El presidente del Tribunal Constitucional Carlos Mesa fue el encargado de conversar con los parlamentarios en la oficina de la bancada nacionalista el lunes 3 de octubre, a quienes les explicó el funcionamiento de la institución.